

según las Leyes en vigor en uno ú otro de los dos países en sus respectivos casos.

Art. 13. Las disposiciones del presente Convenio no podrán perjudicar en manera alguna el derecho que corresponde á cada una de las Altas Partes contratantes para permitir, vigilar ó prohibir por medio de medidas de legislación ó de policía interior la circulación, la representación ó la exposición de toda obra ó producción, con respecto á la cual la Autoridad competente haga ejercer este derecho.

El presente Convenio no se opondrá por ningún motivo al derecho de la una ó de la otra de las Altas Partes contratantes para prohibir la importación de sus propios Estados de los libros que, en virtud de sus Leyes interiores ó por estipulaciones acordadas con otras Potencias, sean ó hayan de ser declarados como falsificaciones.

Hecho por duplicado en Madrid á 23 de Junio de 1884. —(L. S.)—(Firmado.)—José Elduayen.—(L. S.)—(Firmado.) J. M. Torres Caicedo.

El presente Convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratificaciones canjeadas en París el 5 de Junio de 1885.

MINISTERIO DE FOMENTO.

PRIMERA SECCION. — PROPIEDAD INTELECTUAL.

Convenio celebrado entre España y la República de los Estados Unidos de Colombia, para la protección de la Propiedad sobre las obras Literarias, Científicas y Artísticas.

S. M. el Rey de España y el Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos de Colombia, animados del deseo de garantizar en pueblos unidos, entre otros vínculos, por el lazo fraternal del idioma, el ejercicio del derecho de propiedad sobre las obras literarias, científicas y artísticas que en cualquiera de las dos Naciones se publiquen, han estimado conveniente celebrar un Convenio especial al efecto, basado en la reciprocidad, y han nombrado por sus Plenipotenciarios, á saber:

S. M. el Rey de España al Sr. Don Bernardo J. de Ologan, su Ministro Presidente en los Estados Unidos de Colombia, y

S. E. el Presidente de los Estados Unidos de Colombia al Sr. Dr. Don José María Quijano Wallis, antiguo Secretario de Relaciones Exteriores.

Quienes, después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes y haberlos hallado en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:

Artículo 1º Desde la fecha en que se ponga en vigor el presente Convenio los autores ó traductores de obras científicas, literarias ó artísticas ó sus representantes legales, que aseguren con los debidos requisitos su derecho de propiedad ó de reproducción en uno de los dos países contratantes, gozarán en el otro de los derechos concedidos á los autores ó traductores de las mismas obras, ó á sus representantes, por la legislación local y en los términos especificados por el presente Convenio, sin que sea necesario cumplir en este otro país con las formalidades prescritas por dicha Ley.

La expresión *obras científicas, literarias y artísticas*, comprende los libros, cuadernos y folletos; las composiciones musicales, las obras de dibujo y de pintura; los mapas, planos y diseños científicos, y todas las demás producciones que puedan ser comprendidas conforme al artículo 8º de este Convenio.

Art. 2º Los autores de cada uno de los dos países gozarán en el otro el derecho exclusivo de traducción de sus propias obras, durante todo el tiempo que el presente Convenio les concede derecho de propiedad sobre las obras escritas en la lengua original.

Los traductores de obras antiguas ó modernas que sean del dominio público en ambos países, disfrutaran, en cuanto á sus traducciones, del derecho de propiedad y de las garantías que le son inherentes; pero no podrán oponerse á que las mismas obras sean traducidas por otros escritores. Por lo demás, los derechos del traductor, respecto á su propia traducción, son los mismos que los del autor original.

Los escritos insertos en publicaciones periódicas, cuyos derechos no hayan sido explícitamente reservados, podrán ser reproducidos por cualesquiera otra de la misma clase, pero siempre se indicará el original de donde se copia.

Art. 3º El derecho de propiedad será garantizado á los autores ó traductores de los dos países durante quince años, prorrogables en su oportunidad por un plazo igual.

El ejercicio de este derecho de propiedad se compartirá por ambos países desde la fecha misma en que haya sido declarado el privilegio á dichos autores ó traductores.

Pero si por la legislación colombiana sobre garantía de la propiedad intelectual se ampliase el término del privilegio señalado por la Ley recopilada de 1834, se estipula que ambas partes harán extensivo ese término á los derechos reconocidos después del canje de este Convenio.

Art. 4º En caso de contravención á las actuales estipulaciones y de defraudación de la propiedad intelectual, las personas que resultasen culpables estarán sujetas, en cada país, á las penas y procedimientos judiciales prescritos ó que se prescriban en lo sucesivo por las Leyes de aquel Estado, para iguales delitos cometidos con respecto á una obra ó producción de origen nacional.

Es circunstancia agravante de la defraudación la variación del título de una obra ó la alteración de su texto para publicarla.

Art. 5º Las Altas Partes contratantes se obligan á entregarse mutuamente en cada trimestre, por conducto de sus Legaciones ú otro autorizado, una lista de las obras á favor de las cuales los autores ó editores hayan asegurado mediante las formalidades prescritas por la Ley sus propios derechos en el país respectivo.

Art. 6º Cuando en uno de los países se deba presentar judicialmente la prueba en que el autor, traductor ó editor ha asegurado su derecho mediante las formalidades prescritas por la Ley en el país de origen, bastará para esa prueba un certificado expedido por el Ministro de Fomento, si se trata de España, y por la Secretaría de Fomento si de Colombia, legalizado respectivamente por el Ministro de Estado ó por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por los correspondientes Representantes diplomáticos ó funcionarios consulares, según sea el caso.

Sin embargo, si el autor ó traductor que goza de la propiedad, según las Leyes del país hubiere remitido ó remitiere al departamento de Fomento del otro uno ó mas ejemplares de la obra motivo del procedimiento, será suficiente prueba la presentación de la obra y la comprobación de su autenticidad con la constancia en la lista oficial á que alude el primer párrafo del artículo anterior, y no habrá necesidad del envío del mencionado certificado.

De todos modos, el hecho de constar la obra en dicha lista, será suficiente cuando medie queja ó demanda de persona autorizada contra el carácter fraudulento de una publicación, para detener la circulación de esta mientras se esclarezcan los hechos.

Art. 7º Serán considerados como actos ilícitos, no solo la impresión, sino la importación, exportación y venta de obras á que se refiere el presente Convenio, cuando se ejecuten sin consentimiento del autor ó legítimo propietario, ó sea fraudulentamente, aun cuando la impresión haya sido hecha fuera de España ó en Colombia, y la importación proceda de un tercer país ó se dirija á él la exportación.

Por los actos fraudulentos cometidos de esta manera en una de las dos Naciones contratantes, podrá en cualquier demanda el legítimo propietario, con arreglo á lo prescrito en los artículos 4º y 6º, en cuanto el fraude tenga relación con la propia jurisdicción.

8º Ambos Estados se aseguran mutuamente el trato de la Nación mas favorecida; es decir, que si en cualquier Convenio para proteger la propiedad intelectual se concedieren mayores ventajas por uno de ellos á una tercera Potencia, el otro disfrutará también de iguales ventajas bajo las mismas condiciones.

Art. 9º Desde el día en que se ponga en vigor el presente Convenio gozarán los ciudadanos de ambos países, respecto á las obras que en el otro impriman ó hagan reproducir, de los derechos que asegure la legislación local á las obras allí reproducidas, cualquiera que sea el lugar de su residencia, y sin exigir otra condición que el cumplimiento de las formalidades establecidas para la inscripción ó registro y consiguiente reconocimiento de la propiedad.

En ausencia del autor ó propietario, debidamente comprobado de la obra, podrá otra persona en su nombre hacer la requerida declaración y solicitar su inscripción ó registro, exhibiendo el correspondiente poder, certificado del Representante de una ú otra Nación ante quien el primero se haya presentado, ó una autorización simple escrita y oportunamente legalizada.

En cuanto á la extensión de los derechos de propiedad que cada país haya de conceder recíprocamente en este caso á sus propios ciudadanos, es decir, España para las obras de españoles reproducidas en Colombia, y Colombia para las de colombianos en España, se aplicarán las disposiciones pactadas en el presente Convenio, á menos que la Nación interesada prefiera ajustarse á la propia legislación, siempre que esta sea mas favorable.

Art. 10. Las Altas Partes contratantes se obligan á comunicarse oportunamente las Leyes y Reglamentos que se establezcan en sus respectivos territorios, con relación al derecho de propiedad intelectual, sobre las obras y reproducciones protegidas por las estipulaciones del presente Convenio, declarándose desde luego dispuestas á extender los derechos aquí reconocidos y establecidos, en cuanto ambas legislaciones concuerden, por lo prescrito en favor de los nacionales, para concederles mayor amplitud.

Art. 11. Lo estipulado en el presente Convenio no podrá afectar en manera alguna el derecho que cada una de las Partes contratantes se reserva expresamente de vigilar y prohibir con medidas legislativas ó de policía interna, la venta y circulación de cualquiera obra ó producción respecto de la cual uno de los dos países considere conveniente ejercer este derecho.

Art. 12. Este Convenio regirá durante un período de seis años, á contar desde el día en que se ponga en vigor, y sus efectos continuarán hasta que haya sido denunciado por una ú otra de las Altas Partes contratantes y durante un año después de la denuncia.

Ambas Partes se reservan, sin embargo, la facultad de introducir, de común acuerdo, en el presente Convenio cualquiera modificación ó mejora que la experiencia demuestre ser conveniente, y que sea compatible con su espíritu y sus principios.

Art. 13. El presente Convenio será ratificado, y el canje de las ratificaciones se verificará en Bogotá, un año después del día de hoy, ó antes si fuere posible.

En el acto del canje se convenirá en la fecha en que simultáneamente empezará á regir, y á partir de la cual será aplicable á las obras publicadas ó reproducidas desde dicho día.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios respectivos lo han firmado por duplicado y puesto en él sus propios sellos.

Hecho en Bogotá á 28 de Noviembre de 1885.

Firmado. — Bernardo J. de Ologan. — Firmado. — José María Quijano Wallis.

El presente Convenio ha sido debidamente ratificado y las ratificaciones canjeadas en Bogotá el día 22 de Noviembre último, habiéndose convenido que entre en vigor desde el día 1º de Enero del corriente año.

(Se continuará.)

Ley de Enjuiciamiento Militar (1)

CAPITULO III.

De la deliberación y sentencia del Consejo.

Art. 331. Constituido el Consejo en sesión secreta para deliberar, apreciará los hechos y las pruebas que resulten de la causa bajo su mas estrecha responsabilidad; y para graduar la importancia de algunos de los delitos esencialmente militares, se atenderá á las disposiciones contenidas en los artículos siguientes:

Art. 332. Se entiende por servicio de armas el acto militar que reclama en su ejecución el uso, empleo ó manejo de las mismas con arreglo á las disposiciones generales que rijan y á las órdenes particulares que dicten los Jefes en su caso.

Para los efectos penales se reputarán tambien como tales servicios de armas, aunque estas no se empuñen por los militares:

1º El de transmitir, recibir y cumplimentar una orden relativa al servicio de armas.

2º Toda acción preparatoria de armarse ó municionarse individualmente cuando se hallen reuni los ó llamados los soldados para formar.

3º Cuantos actos preliminares al mismo servicio de armas se relacionen con este ó afecten á su ejecución.

4º Se reputarán tambien como si estuvieran prestando servicio de armas los militares que perturben ó impidan la ejecución de un servicio de esta especie, y los que de cualquier modo atentan contra alguna de las personas encargadas de desempeñarlo.

Art. 333. Para la aplicación del caso 6º, artículo 94 del Código penal del Ejército, se entenderá que la fuga se verifica siempre en direccion al enemigo y ha sido consumada, cuando el que la realiza rebasa la distancia ó zona previamente señalada por el Jefe de la tropa como límite de la plaza, campamento, poblado ó posición militar; y de no estar señalado este límite cuando el fugado rebasa las líneas ó puestos exteriores, la vanguardia, flanco ó retaguardia de las tropas en marcha, ó bien cuando sin previo permiso se aleje hasta ocultarse de la vista de estas.

Art. 334. Para aplicar las penas especialmente señaladas en el Código á los que delinquen en campaña, se entenderá que las tropas están al frente del enemigo cuando hallálose dentro del territorio declarado en estado de guerra ó en operaciones de campaña exista notoriamente en el mismo ó en sus aguas marítimas jurisdiccionales cualquier fuerza enemiga y armada.

Se considerarán igualmente al frente de rebeldes ó sediciosos en cuanto haya dentro ó á la vista de la localidad campamento ó posición que ocupen las tropas, cualquier grupo ó fuerza armada en actitud rebelde ó sediciosa, aun cuando no hubiere procedido declaración formal del estado de guerra.

Y se entenderá, por último, que las tropas se hallan en campaña cuando residan ú operen en las plazas ó territorios declarados en estado de guerra, aunque no aparezca ostensiblemente ningún enemigo armado; así como siempre que por precaucion y otras razones de Estado ordenen las Autoridades militares que las tropas practiquen el servicio como en campaña.

Art. 335. Para la calificación de los delitos de insulto á superiores de que trata el capítulo primero título V, libro II del Código penal del Ejército, se tendrán presente las siguientes reglas:

1º Que se consideran actos del servicio todos los que tengan relación con los deberes que impone al militar su permanencia en el Ejército.

2º Que la agresión ó amenaza al superior á cuyas órdenes el inferior se hallare, que no tengan lugar precisamente en acto del servicio de armas ó llamado de él se presume cometida en servicio que no es de armas y comprendida en el párrafo segundo del artículo 169 ó en el artículo 173 del Código, según los casos, á no resultar probado que el delito se ha cometido sin tener relación alguna con el servicio.

3º Que todo militar debe considerarse siempre á las órdenes del que le sea superior en grado, cuando éste, pudiendo hacerlo, le exija el cumplimiento de alguno de los deberes que impone el servicio militar.

Art. 336. Para la aplicación de los artículos 170 y 176 del Código penal del Ejército, es preciso que el hecho justiciable se cometa por militares contra personas constituidas en autoridad cuando se hallaren ejerciendo funciones de sus cargos ó con ocasion de

(1) Véase el número anterior.